



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso: ORDINARIO LABORAL
Radicado: 05001-31-05-015-2021-00092-01 (O2-21-210)
Accionante: GLORIA CECILIA RÚA JARAMILLO
Accionada: UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN
Procedencia: JUZGADO QUINCE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
Providencia: SENTENCIA No. 115
Asunto: CONTRATO DE TRABAJO – ACREENCIAS LABORALES

En Medellín, a los cuatro (04) días del mes de agosto del año dos mil veintitrés (2023), la **Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE y VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, quien actúa como Magistrado Sustanciador, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL conocido bajo el radicado único nacional 05001-31-05-015-2021-00092-01 (O2-21-210), instaurado por GLORIA CECILIA RÚA JARAMILLO en contra de la UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN, con el fin de resolver el grado jurisdiccional de consulta en favor de la señora GLORIA CECILIA RÚA JARAMILLO, respecto de la sentencia que fulminó la primera instancia, proferida el 17 de junio de 2021 por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín.

De conformidad con lo previsto en el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, “...[p]or medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020, y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...”, se adopta la decisión correspondiente mediante la presente providencia escrita, cuya ponencia fue previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

1. ANTECEDENTES

La señora GLORIA CECILIA RÚA JARAMILLO actuando a través de gestor judicial, promovió demanda ordinaria laboral en contra de la UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN, en punto a que se declare la existencia de una única relación de trabajo vigente entre el 05 de mayo de 2014 y el 30 de abril de 2019, reclamando en consecuencia el reconocimiento y pago del auxilio de

cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicio, vacaciones y aportes al SGSS durante todo el tiempo que estuvo vigente el nexo contractual, junto con la indemnización moratoria de que trata el artículo 65 del CST, la sanción por no consignación de las cesantías a un fondo, la indexación y las costas.

En respaldo de sus aspiraciones señala que, inició a prestar sus servicios personales a favor de la accionada a partir del 05 de mayo de 2014 y hasta el 30 de abril de 2019, a través de sendos contratos por prestación de servicios personales, devengando como última remuneración una suma mensual igual a \$ 4.500.000 y estando sujeta a las órdenes impartidas por los señores Diego Alejandro Morales, Juan Esteban Londoño Perea y Pablo Múnera Alzate. Relata que, por orden de la accionada, suscribió el 30 de mayo de 2014, un compromiso para ejercer su labor de manera exclusiva para la institución universitaria.

En lo que concierne a las circunstancias en que prestó sus servicios personales, menciona que su horario de entrada corresponde a las 09:00 a. m. y en muchas ocasiones terminaba su labor sobre las 7 p. m.; debiendo continuar disponible para su jefe inmediato vía telefónica o a través de la plataforma de mensajería WhatsApp.

1.1. Trámite de primera instancia

La demanda se admitió el 19 de abril de 2021 (doc.02, carp.01), y se notificó a la accionada el 20 de abril de ese mismo año (doc.03, carp.01), institución universitaria que se opuso de manera categórica a la prosperidad de las pretensiones. Frente a la narración de los hechos de la demanda, negó la veracidad de los mismos. En su defensa propuso las excepciones de fondo que nominó como inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, temeridad y carencia de buena fe de la demandante, buena fe de la demandada, compensación y prescripción (doc.04, carp.01).

1.2. Decisión de Primera Instancia

La controversia planteada se dirimió en primera instancia el 17 de junio de 2021 (docs.06 y 09, carp.01), mediante sentencia proferida por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, con la que decidió absolver a la demandada de los pedimentos reclamados por la señora GLORIA CECILIA RÚA JARAMILLO, gravándola en costas.

Para sustentar su decisión, la cognoscente de primer grado luego de explicar el principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formalidades y los elementos que integran un contrato de trabajo, coligió que la relación contractual bajo escrutinio se sujetó a las

características y presupuestos de un verdadero contrato por prestación de servicios independientes.

1.3. Grado Jurisdiccional de Consulta

Teniendo en cuenta que la decisión adoptada en primera instancia, fue adversa a los intereses de GLORIA CECILIA RÚA JARAMILLO, la sentencia será examinada bajo el grado jurisdiccional de consulta en su favor, atendiendo que no fue objeto de alzada.

1.4. Trámite de Segunda Instancia

El grado jurisdiccional de consulta se admitió el 13 de agosto de 2021 (doc.02, carp.02), y mediante proveído del día 20 siguiente (doc.03, carp.02) se corrió traslado a las partes para que, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 el Decreto Legislativo 806 de 2020 - vigente para la época-, presentaran los alegatos de conclusión por escrito, de considerarlo del caso.

El vocero judicial de la promotora (doc.05, carp.02), presentó las alegaciones pertinentes solicitando se revoque la decisión confutada, para en su lugar se acceda a todos y cada uno de las súplicas consignadas en el libelo genitor. Afirma que contrario a lo expuesto por la *a quo*, dentro del plenario se probó la concurrencia de los tres elementos que conforman toda relación de trabajo, como lo son: **i.** La prestación personal del servicio; **ii.** Un salario como contraprestación del servicio; y **iii.** La continuada dependencia y subordinación. A efecto, enuncia como pruebas erróneamente apreciadas los testimonios recaudados y ulteriormente sostiene que la decisión criticada tampoco tuvo en cuenta los argumentos esbozados en la etapa de alegatos de primera instancia.

A posteriori el apoderado de la universidad accionada (doc.04, carp.01), solicitó se confirme la sentencia venida en Grado Jurisdiccional de Consulta aduciendo que en el caso de marras no se configuran los elementos del contrato realidad, pues los servicios prestados por la actora eran ajenos a la actividad misional de la institución. Luego asentó que los contratos de prestación de servicios profesionales que fueran suscritos con la señora RÚA JARAMILLO tuvieron como origen las licitaciones públicas donde participó la universidad para realizar concurso de méritos o procesos de selección para la provisión de empleos públicos, a lo que se aúna que la demandante no cumplía el horario asignado a los empleados de planta de la convocada a juicio.

2. ANÁLISIS DE LA SALA

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a estudiar en su integridad el fallo de instancia en el Grado Jurisdiccional de Consulta a favor de GLORIA CECILIA RÚA JARAMILLO, conforme con el artículo 69 del CPTSS.

2.1. Problema jurídico

El *thema decidendi* en el asunto puesto a consideración de la Sala, se contrae a determinar si entre GLORIA CECILIA RÚA JARAMILLO y la UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN, en lo sucesivo, UdeM, existió una relación laboral regida por un contrato de trabajo durante el periodo comprendido entre el 05 de mayo de 2014 y el 30 de abril de 2019, para así determinar si le asiste derecho al reconocimiento de las acreencias laborales y aportes al SGSS, a la par de las indemnizaciones y la indexación a las que aspira.

2.2. Sentido del Fallo

La Sala confirmará la decisión de primer grado, considerando que en la relación que estuvo vigente entre la demandante GLORIA CECILIA RÚA JARAMILLO y la UdeM, no se verifican los elementos que estructuran un verdadero vínculo laboral contractual, de acuerdo con lo señalado por el artículo 23 del CST, en virtud de que la institución encartada logró derruir la presunción prevista en el artículo 24 del estatuto sustantivo del trabajo y no se abrió paso al éxito de las súplicas demandatorias.

2.3. Solución del Problema Jurídico Planteado

La carga de la prueba es un principio de derecho procesal, encaminado a establecer a cuál de los sujetos del proceso le concierne la aportación de las pruebas, y cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan del incumplimiento de dicha carga; en su criterio clásico la carga de probar se ha fijado en cabeza de quien afirma los hechos que fundamentan la procedencia del reconocimiento de los derechos debatidos, correspondiéndole al mismo, probar sus aserciones para que el juzgador establezca si es procedente el reconocimiento de los derechos que reclama, debiéndose desestimar sus pretensiones en caso de que los hechos no aparezcan probados en el proceso.

El concepto prístino de la carga probatoria se compendia en el aforismo romano *ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat*, según el cual, quien afirma un hecho debe probarlo, y quien

lo niega, está libre de la carga de probar, regla procesal que guarda concordancia con las previsiones contenidas en el artículo 167 del CGP, aplicable por remisión analógica a los juicios del trabajo y de la seguridad social, en los términos previstos en el artículo 145 del CPTSS, y por cuya virtud, le incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Previo a dirimir la litis planteada, se advierte que no son objeto de discusión los siguientes supuestos fácticos establecidos en primera instancia: que entre la Universidad de Medellín y la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC fueron suscritos contratos de prestación de servicios para el desarrollo de pruebas de selección y atención de las reclamaciones presentadas por los aspirantes dentro de distintos concursos de mérito (págs.115 a 144, 171 a 174, 180 a 181, 187 a 255, doc.02, carp.01); que la señora GLORIA CECILIA RÚA JARAMILLO suscribió diversos contratos de prestación de servicios con la Universidad de Medellín, en los términos que a continuación se detallan:

CONTRATO / TIPO DE VINCULACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	OBJETO	PÁG(S) y DOC. EN LA CARP.01
Nro. 3005 / Prestación de servicios	5-may-14	31-dic-14	Profesional para la atención de reclamaciones en el desarrollo de las convocatorias suscritas por la Universidad de Medellín a través del Centro Integral de Asesorías y Consultorías (CIAC), para los procesos de selección y provisión de empleos de carrera administrativa, desde su etapa de verificación hasta la publicación de lista de elegibles.	págs.17 a 18, doc.01
Otrosí nro. 2 al contrato 3005/ Prestación de servicios	31-dic-14	31-ene-15	Profesional para la atención de reclamaciones en el desarrollo de las convocatorias suscritas por la Universidad de Medellín a través del Centro Integral de Asesorías y Consultorías (CIAC), para los procesos de selección y provisión de empleos de carrera administrativa, desde su etapa de verificación hasta la publicación de lista de elegibles.	pág.20, doc.01
Otrosí nro. 3 al contrato 3005/ Prestación de servicios	31-ene-15	31-mar-15	Profesional para la atención de reclamaciones en el desarrollo de las convocatorias suscritas por la Universidad de Medellín a través del Centro Integral de Asesorías y Consultorías (CIAC), para los procesos de selección y provisión de empleos de carrera administrativa, desde su etapa de verificación hasta la publicación de lista de elegibles.	pág.21, doc.01
Otrosí nro. 4 al contrato 3005/ Prestación de servicios	31-mar-15	31-may-15	Profesional para la atención de reclamaciones en el desarrollo de las convocatorias suscritas por la Universidad de Medellín a través del Centro Integral de Asesorías y Consultorías (CIAC), para los procesos de selección y provisión de empleos de carrera administrativa, desde su etapa de verificación hasta la publicación de lista de elegibles.	pág.22, doc.01
Nro. 7642 / Prestación de servicios	15-may-15	8-ago-15	Profesional para la atención a reclamaciones desarrollo del proceso de selección de la convocatoria No. 317 de 2013 Parques Nacionales, cuyo objeto es la provisión de empleos vacantes del sistema general de carrera administrativa de la planta global de personal de la Unidad Administrativa Especial Parques Naturales de Colombia	págs.23 a 24, doc.01
Otrosí nro. 01 al contrato nro. 7642 / Prestación de servicios	8-ago-15	31-ago-15	Profesional para la atención a reclamaciones desarrollo del proceso de selección de la convocatoria No. 317 de 2013 Parques Nacionales, cuyo objeto es la provisión de empleos vacantes del sistema general de carrera administrativa de la planta global de personal de la Unidad Administrativa Especial Parques Naturales de Colombia	pág.30, doc.01

CONTRATO / TIPO DE VINCULACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	OBJETO	PÁG(S) y DOC. EN LA CARP.01
Otrosí nro. 02 al contrato nro. 7642 / Prestación de servicios	30-ago-15	30-sep-15	Profesional para la atención a reclamaciones desarrollo del proceso de selección de la convocatoria No. 317 de 2013 Parques Nacionales, cuyo objeto es la provisión de empleos vacantes del sistema general de carrera administrativa de la planta global de personal de la Unidad Administrativa Especial Parques Naturales de Colombia	pág.31, doc.01
Nro. 9318 / Prestación de servicios	1-oct-15	31-dic-15	Profesional para atención a reclamaciones en desarrollo del proceso de selección de la convocatoria No. 247 de 2012, cuyo objeto es: "Diseñar, aplicar y procesar la prueba de entrevista para proveer los empleos vacantes de etnoeducadores directivos docentes y docentes que prestan su servicio educativo a población afrocolombiana negra, raizal y palenquera en establecimientos educativos oficiales del municipio de San Andrés de Tumaco	págs.32 a 33, doc.01
Otrosí nro. 1 al contrato nro. 9318	31-dic-15	28-feb-16	Profesional para atención a reclamaciones en desarrollo del proceso de selección de la convocatoria No. 247 de 2012, cuyo objeto es: "Diseñar, aplicar y procesar la prueba de entrevista para proveer los empleos vacantes de etnoeducadores directivos docentes y docentes que prestan su servicio educativo a población afrocolombiana negra, raizal y palenquera en establecimientos educativos oficiales del municipio de San Andrés de Tumaco	págs.34 y 35, doc.01
Otrosí nro. 2 al contrato nro. 9318	28-feb-16	31-may-16	Profesional para atención a reclamaciones en desarrollo del proceso de selección de la convocatoria No. 247 de 2012, cuyo objeto es: "Diseñar, aplicar y procesar la prueba de entrevista para proveer los empleos vacantes de etnoeducadores directivos docentes y docentes que prestan su servicio educativo a población afrocolombiana negra, raizal y palenquera en establecimientos educativos oficiales del municipio de San Andrés de Tumaco	pág.36, doc.01
Otrosí nro. 3 al contrato nro. 9318	31-may-16	30-oct-16	Profesional para atención a reclamaciones en desarrollo del proceso de selección de la convocatoria No. 247 de 2012, cuyo objeto es: "Diseñar, aplicar y procesar la prueba de entrevista para proveer los empleos vacantes de etnoeducadores directivos docentes y docentes que prestan su servicio educativo a población afrocolombiana negra, raizal y palenquera en establecimientos educativos oficiales del municipio de San Andrés de Tumaco	pág.37, doc.01
Nro. 9764 / Prestación de servicios	1-nov-15	31-dic-16	Coordinadora de atención a reclamaciones y soporte jurídico en el marco de los diferentes contratos y/o convenios suscritos entre la Universidad de Medellín y las diferentes entidades públicas y/o privadas para la realización de concursos de méritos, procesos de selección y cualquier otro tipo de proyecto que adelante la institución a través del Centro Integral de Asesorías y Consultorías	págs.39 a 41, doc.01
Nro. 14591 / Prestación de servicios	15-dic-16	14-mar-18	Coordinadora de atención a reclamaciones y soporte jurídico en el marco de los diferentes contratos y/o convenios suscritos entre la Universidad de Medellín y las diferentes entidades públicas y/o privadas para la realización de concursos de méritos, procesos de selección y cualquier otro tipo de proyecto que adelante la institución a través del Centro Integral de Asesorías y Consultorías	págs.42 a 44, doc,01
Otrosí nro. 01 al contrato nro. 14591 / Prestación de servicios	14-mar-18	30-ago-18	Coordinadora de atención a reclamaciones y soporte jurídico en el marco de los diferentes contratos y/o convenios suscritos entre la Universidad de Medellín y las diferentes entidades públicas y/o privadas para la realización de concursos de méritos, procesos de selección y cualquier otro tipo de proyecto que adelante la institución a través del Centro Integral de Asesorías y Consultorías	pág.46, doc.01
Nro. 23024 / Prestación de servicios	1-jul-18	31-ene-19	Coordinadora de atención a reclamaciones y jurídico en el marco de los diferentes contratos y/o convenios suscritos entre la Universidad de Medellín y las diferentes entidades públicas y/o privadas para la realización de concursos de méritos, procesos de selección y cualquier otro tipo de proyecto que adelante la institución a través del Centro Integral de Asesorías y Consultorías	págs.47 a 49, doc.01
Otrosí nro. 01 al contrato 23024 / Prestación de servicios	31-ene-19	31-mar-19	Coordinadora de atención a reclamaciones y jurídico en el marco de los diferentes contratos y/o convenios suscritos entre la Universidad de Medellín y las diferentes entidades públicas y/o privadas para la realización de concursos de méritos, procesos de selección y cualquier otro tipo de proyecto que adelante la institución a través del Centro Integral de Asesorías y Consultorías	pág.50, doc.01

2.3.1. El Contrato de Trabajo

El derecho al trabajo ha sido reconocido en nuestro ordenamiento jurídico como un valor esencial del Estado Social de Derecho, y por ello en el Preámbulo y los artículos 1º, 2º, 25, 39, 48, 55, 56 y 64 de la Constitución Política y el legislador se ocuparon de brindarle una atención especial, reconociéndolo como aquel que le asiste a toda persona para pretender y obtener un trabajo en condiciones dignas, no solo como un mecanismo para asegurar el mínimo vital y nivel de vida digna, sino también como un requisito esencial para la concreción de la libertad, la autonomía personal y el libre desarrollo de la personalidad.

El contrato de trabajo es aquel mediante el cual una persona natural, denominada trabajador, se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, denominada empleador, bajo su continuada dependencia o subordinación, servicio por el cual recibe una remuneración (artículo 22 del CST). Para que se dé una relación de trabajo protegida por la legislación laboral, debe concurrir una tríada de elementos esenciales, cuales son: (i) que la actividad desplegada por el trabajador sea personal, es decir, realizada por sí mismo; (ii) una continua subordinación o dependencia del trabajador, la que faculta al empleador para imponerle reglamentos y exigirle el cumplimiento de órdenes en cuanto al tiempo, modo, calidad y lugar, y (iii) la retribución del servicio, mediante el pago del salario convenido por las partes (artículo 23 del CST).

Reunidos estos elementos, se presume que existe un contrato de trabajo, y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni por las condiciones o modalidades contractuales que se estipulen (artículo 24 del CST), y por consiguiente, al trabajador solo le basta demostrar la ejecución o prestación personal de un servicio, para que opere en su favor la presunción de la existencia de un vínculo laboral (CSJ SL del 29-11-1958; SL del 05-05-1982, radicado 8247; SL del 27-06-2000, radicado 14096; SL del 17-05-2011, radicado 38182; SL-10546 del 06-08-2014, radicado 41839; SL-15507 del 11-11-2015, radicado 45068; SL-16528 del 26-10-2016, radicado 46704; SL-6621 del 03-05-2017, SL-781 del 14-03-2018, radicado 47852; radicado 65768; SL-4444 del 16-10-2019, radicado 58413; SL-577 del 12-02-2020, radicado 68636; SL-3126 del 19-05-2021, radicado 68162; SL 3847 del 25-08-2021, radicado 79919); aclarando la Sala que esta presunción no releva al trabajador demandante de otras cargas probatorias tendientes a demostrar las condiciones en las que desarrolló la labor, como lo serían la fecha de ingreso y retiro, salario, cargo o jornada, como así lo ha determinado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en diversas oportunidades, entre ellas, la decisión del de 05-08-2009, radicado No. 36549 y más recientemente las del 06-06-2019, radicado 58895 y del 01-12-2020, radicado 76645.

De lo hasta aquí discurrido, cristalino despunta que es deber del trabajador accionante en los conflictos de esta naturaleza, presentar al juzgador los elementos de persuasión que den cuenta de la prestación personal del servicio a favor de quien reputa la condición de verdadero empleador, para así activar la presunción contenida en el artículo 24 del CST, todo ello de acuerdo con la carga probatoria que le impone el artículo 167 del CGP.

Para el caso concreto y en lo atinente a la prestación personal del servicio alegada en favor de la Universidad de Medellín, se allegó como medios de prueba i. Cadena de mensajes de correo electrónico enviados desde y hacia la cuenta coordinadorjuridico@udem.edu.co, ii. Reportes ingresos y salidas del campus de la Universidad de Medellín de los carnés asignados a la señora RÚA JARAMILLO como contratista y egresada de la institución (págs.267 a 291, doc.04, carp.01), y; iii. Contratos de prestación de servicios nros. 3005, 7642, 9318, 9764, 14591 y 23024, con sus respectivos otrosí (págs.17 a 50, doc.01, carp.01).

Aunado a lo anterior, se recibieron los testimonios de Gustavo Adolfo Gil Valencia, Diego Alejandro Morales Ospina, Juan Esteban Londoño y Richard López Muñoz, junto con el interrogatorio de parte absuelto por la accionante.

Así, vemos que el señor Gustavo Adolfo Gil Valencia relató que es abogado especialista en derecho empresarial y que prestó sus servicios a favor de la institución demandada entre los años 2014 a 2019, reconociendo que conoció de vista, trato y comunicación a la quejosa desde el mes de mayo de 2014, pues trabajaron juntos. Expuso que se vinculó laboralmente con la universidad a través de un contrato de prestación de servicios como profesional de apoyo de reclamaciones, para posteriormente ocupar el cargo de Coordinador General de Procesos de Selección.

En lo que incumbe a la actora, explicó que esta se encontraba vinculada con la entidad en época anterior y permaneció en el cargo hasta el 2019; que debían cumplir las mismas funciones del cargo de profesional de reclamaciones hasta que la promotora fue ubicada en el cargo de Coordinadora Jurídica. Aseveró que a su juicio se configuró entre los contendientes una verdadera relación de trabajo debido a la subordinación que ejercía la universidad y por la necesidad de prestar el servicio exclusivamente dentro de sus instalaciones. Sostuvo que el señor Diego Alejandro Morales, director del Centro Integral de Asesoría y Consultoría - CIAC, era el jefe de la demandante o en su ausencia el señor Juan Esteban Londoño.

Al punto de las condiciones en que la señora Rúa Jaramillo desarrollaba las actividades contratadas, contó que la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC contratava a la

universidad para desarrollar los concursos para el ingreso a la carrera administrativa, debiendo a partir de ese momento, prestar el servicio por tiempo completo dentro de la universidad y utilizando los correos institucionales que les eran suministrados con el dominio @udem.edu.co. Recordó que la señora Rúa Jaramillo no tenía autonomía con los horarios, pues si bien, de acuerdo con el flujo de actividades pendientes, se manejaba un “tiempo full” y “tiempo valle”, por el cargo y el nivel de responsabilidad debía estar disponible las 24 horas al día; destacando que en más de una ocasión ingresaba a laborar antes de 8 a. m. y se retiraba entre las 6 p. m. y las 8 p. m., o al día siguiente en horas de la madrugada.

Asimismo, no podía faltar o ausentarse de su lugar de trabajo, memorando que en una época la accionante cursó una especialización en la universidad y debían llamarla durante las horas de clase para que atendiera determinados asuntos. Relató que en varias ocasiones debía viajar fuera de la ciudad de Medellín, por ejemplo, a Bogotá y a Quibdó, costos que eran asumidos por la institución con la imposibilidad de negarse por el temor de ser despedida.

Agregó que el director del CIAC en distintas ocasiones le llamó la atención o le pedía explicaciones a la señora GLORIA RÚA JARAMILLO cuando vencía el término para dar respuesta a una acción de tutela o por requerimientos efectuados por parte de la CNSC, recalcando que en varias oportunidades presenció maltrato laboral por parte del jefe inmediato.

Al momento que se le indaga frente a la modalidad de vinculación de la promotora, el valor de sus honorarios y el procedimiento para solicitar permisos de estudio, acepta que no conoció el texto de los contratos que suscribió ni la cuantía o forma de la remuneración, empero, intuye que se encontraba entre \$ 4.000.000 y \$ 4.500.000 y percatándose que no era necesario solicitar permiso de estudio al área de talento humano de la universidad, pues ese tema lo manejaba directamente con el CIAC a través de su director. Últimamente aclaró que la razón por la que los contratistas debían prestar los servicios dentro de la universidad, obedecía a los requerimientos de la CNSC, pues el uso y acceso a los aplicativos de esa entidad solo se autorizaba a unos equipos y a una IP¹ determinada.

Richard López Muñoz, también profesional del derecho, afirmó que fue contratista de la universidad entre el 01-sept-17 y el 1-mar-2019, sin embargo, desde el 2014 realizaba actividades puntuales en temas de análisis de PQR. Relató que conoció a la demandante entre los años 2014⁷ y 2019, pues laboraban en la misma oficina cuando aquella fungía como Coordinadora Jurídica, siendo enfático en afirmar que la señora GLORIA CECILIA RÚA JARAMILLO se mantuvo vinculada de forma continua mediante contratos por prestación de

¹ “Internet Protocol” Dirección única que identifica a un dispositivo en Internet o en una red local.

servicios, lo que sabe y le consta pues tuvo a la vista los contratos, en razón a que, como equipo de trabajo, eran citados para su firma así como para la suscripción de las cartas de intención respectivas. Asintió que a la promotora le asiste razón en sus pedimentos, en atención a las circunstancias que rodearon la prestación de sus servicios, resaltando la falta de autonomía, la necesidad de permanecer dentro de la universidad y la impartición de órdenes por parte de Diego Morales, director del CIAC o de su delegado, Pablo Múnera.

Aduce que presenció cuando en varias ocasiones a la promotora se le llamó la atención por parte del mencionado señor Diego Morales, quien además le solicitaba rendición de cuentas y elaboración de informes. En lo que incumbe a la forma en que la actora debía prestar el servicio, refiere que las labores debían cumplirse dentro de la universidad y en los cubículos que tenían asignados, pues era en ese lugar que se contaba con los sistemas, archivos y el acceso a la información necesaria para cumplir los requerimientos de la CNSC dentro de los procesos de convocatorias a concursos de méritos que eran administrados por la institución de educación superior.

También aseguró que GLORIA CECILIA RÚA JARAMILLO debía retirarse por breves momentos de las clases de posgrado que estaba recibiendo cuando era requerida por el director del CIAC para enviar un documento, firmar un informe o atender un requerimiento en particular. Enfatizó que el horario de trabajo podía iniciar entre las 8 a. m. y 9 a. m. sin tener una hora fija de salida, por cuanto dependía de la cantidad de requerimientos pendientes para entregarle a la CNSC.

Acotó que se suscribieron varios contratos de prestación de servicios donde se fijaban diferentes honorarios, llegando incluso en ocasiones a ejecutarse de manera simultánea, caso en el cual, se causaban y pagaban la totalidad de los honorarios pactados en uno y otro vínculo contractual, sin embargo, no todas las órdenes que debía cumplir se enmarcaban dentro del objeto u obligaciones contractuales.

Posteriormente, Juan Esteban Londoño Correa, Analista de Proyectos del CIAC desde el año 2014, dijo que tiene a su cargo la verificación de todos los contratos y la autorización de los pagos, por lo que conoce y le consta la vinculación de la señora Gloria Rúa Jaramillo, afirmando que en diferentes periodos se ejecutó más de un contrato, por lo que le eran reconocidos los honorarios pactados en cada uno de estos.

Anotó que, la universidad participaba en las licitaciones publicadas por la CNSC para la organización de convocatorias a concursos de méritos para el acceso a empleos públicos, firmando la actora un contrato de prestación de servicios frente a cada una de las convocatorias

donde se necesitara su apoyo. Informó que la CNSC implementaba un acuerdo de confidencialidad y exigía que el equipo de trabajo la institución educativa hiciera uso de un determinado equipo de cómputo para el acceso a la plataforma y que estas condiciones de conectividad y los espacios eran verificados por parte de la coordinadora de la convocatoria y el ingeniero de sistemas, todos adscritos al CNSC, y que; todos los contratistas firmaban una carta de intención donde dejaban constancia del intereses de participar en el proceso de selección y que tenían conocimiento de las condiciones del vínculo.

Por su parte, Diego Alejandro Morales Ospina, Director del CIAC de la UdeM, expresó que la demandante prestó sus servicios como contratista en desarrollo de los vínculos contractuales celebrados para la realización de concursos de méritos convocados por la CNSC y algunas entidades territoriales; que fueron celebrados varios contratos desde el 05-may-14 y hasta el 30-abr-2019, llegando a ejecutar más de un contrato durante el mismo periodo de tiempo, percibiendo la actora las remuneraciones pactadas en cada vínculo. Adujo que los contratistas debían prestar sus servicios dentro de las instalaciones de la universidad, pues conforme con los Acuerdos de niveles de servicio y de seguridad informática suscritos con la CNSC, estas medidas eran necesarias para evitar la filtración de la información hacia terceros no autorizados.

Por ello, la universidad debía contar con salas especiales donde se surtieran las etapas de verificación de requisitos mínimos de los aspirantes, así como también para el diseño, construcción, ensamble y aplicación de pruebas, mientras que las unidades de cómputo debían contar con requisitos de seguridad idóneos para prevenir el acceso a personal no autorizado; condicionamientos que eran evaluados por la CNSC desde la acreditación de la institución educativa, como también, cada vez que le fuera adjudicado un contrato o resultara responsable del diseño de un concurso de méritos.

En lo atinente a las funciones y el modo en que las ejercía, recalcó que no se le asignó un horario, sin embargo, debía garantizar la atención de las peticiones, reclamaciones y acciones de tutela dentro del marco de los concursos que estuvieran en curso, aceptando que, en momentos se presentaba mayor demanda, contando la promotora del juicio con un equipo de asesores jurídicos que la apoyaban. Cuando se le inquiere si la señora GLORIA RÚA JARAMILLO debía prestar servicios de manera exclusiva a la institución universitaria, puso de presente que, la exclusividad atañe a un requisito de la CNSC en el proceso licitatorio, exclusividad que comportaba que ningún contratista podría postular su hoja de vida con dos o más universidades que estuvieran participando en la misma licitación. Añadió que la actora en efecto prestó sus servicios profesionales a la empresa Gestión Organizacional S.A.S., de

propiedad de la también contratista y Coordinadora de Pruebas, Diana Patricia Vera Fernández, tal y como le fuera informado por la propia accionante.

Ahora, del análisis conjunto de los elementos de prueba descritos, a más de lo reflejado en las pruebas documentales ya analizadas, se aprecia que en el *sub lite*, la impulsora procesal demostró de manera fehaciente haber puesto su fuerza de trabajo a disposición del pretenso empleador, a partir del 05 de mayo de 2014, ejerciendo las labores de Profesional para la atención de reclamaciones en el desarrollo de las convocatorias suscritas por la Universidad de Medellín a través del Centro Integral de Asesorías y Consultorías (CIAC), y posteriormente como Coordinadora de atención a reclamaciones y jurídico; inferencia que se logra a partir de lo depuesto por los testigos Gustavo Adolfo Gil Valencia, Diego Alejandro Morales Ospina, Juan Esteban Londoño y Richard López Muñoz, quienes fueron contestes en afirmar que la accionante en todo momento prestó sus servicios en las instalaciones de la UdeM, describiendo las funciones de atención de las reclamaciones, peticiones y acciones constitucionales que se promovieran en el marco de las convocatorias a concursos de méritos administrados por al CNSC o por otras entidades territoriales.

Los referidos testimonios merecen plena credibilidad, en tanto que los deponentes fueron compañeros de trabajo de la impetradora, con suficiente cercanía como para conocer los detalles de la labor desempeñada, además que no se detectan incoherencias entre sus dichos, ni con las demás pruebas obrantes en el expediente; tampoco se observan razones para considerar que les asiste algún interés directo en el resultado del proceso.

Establecido este punto y probado como está la prestación personal del servicio de la señora GLORIA CECILIA RÚA JARAMILLO a favor de la UdeM, se activa la presunción *iuris tantum* contenida en el artículo 24 del CST, y con ello, se traslada la carga de la prueba a la institución demandada a fin de que desvirtuara los elementos restantes que integran la definición de un contrato de trabajo; los que memora la Sala se circunscriben a **i.** La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador y; **ii.** Un salario como retribución del servicio.

Bajo esa tesitura, en la condición de contratista independiente que detentaba la señora RÚA JARAMILLO para la prestación del servicio de atención o respuesta a las peticiones y acciones constitucionales que se promovieran en el marco de las convocatorias a concursos de méritos administrados por al CNSC o por otras entidades territoriales.

De acuerdo con la tesis de la defensa, para la Sala, diáfano refulge que la hipótesis fáctica se encuadra en el artículo 34 del CST, al que enseña:

“ARTICULO 34. CONTRATISTAS INDEPENDIENTES. 1o) Son contratistas independientes y, por tanto, verdaderos empleadores y no representantes ni intermediarios, las personas naturales o jurídicas que contraten la ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficios de terceros, por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y directiva. Pero el beneficiario del trabajo o dueño de la obra, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio, será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, solidaridad que no obsta para que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso o para que repita contra él lo pagado a esos trabajadores. 2o) El beneficiario del trabajo o dueño de la obra, también será solidariamente responsable, en las condiciones fijadas en el inciso anterior, de las obligaciones de los subcontratistas frente a sus trabajadores, aún en el caso de que los contratistas no estén autorizados para contratar los servicios de subcontratistas”. -Negritas intencionales de la Sala-

En ese contexto, se ha adocinado, en el mismo sentido, frente a las particularidades del contrato de prestación de servicios, que:

*“[...] el contrato de prestación de servicios se caracteriza por la independencia o autonomía que tiene el contratista para ejecutar la labor convenida con el contratante, lo cual lo exime de recibir órdenes para el desarrollo de sus actividades; **no obstante, este tipo de contratación no está vedado de la generación de instrucciones, de manera que es viable que en función de una adecuada coordinación se puedan fijar horarios, solicitar informes e incluso establecer medidas de supervisión o vigilancia sobre esas mismas obligaciones. Lo importante, es que dichas acciones no desborden su finalidad a punto de convertir tal coordinación en la subordinación propia del contrato de trabajo.**”*

[...]

Desde esa perspectiva, cuando se someta a juicio el principio de la realidad sobre las formas con el fin de que se establezca la existencia del contrato de trabajo, le corresponde al Juez, en cada caso, sin desconocer los principios tuitivos del derecho laboral, analizar las particularidades fácticas propias del litigio a fin de establecer o desechar, según el caso, los elementos configurativos de la subordinación”. -Negritas y subrayado intencional de la Sala-

En ese estado de cosas, emerge en evidente, que la prestación de servicios del contratista independiente se revela con características propias diversas a las de una relación laboral subordinada tradicional: **i.** La autonomía e independencia técnica, administrativa y financiera en cuanto a la forma de ejecución de la labor o para la entrega del producto encomendado; **ii.** La responsabilidad exclusiva de los riesgos de su propia gestión; **iii.** La plena facultad para vincular al personal que considere idóneo y necesario para realizar la labor contratada, frente a quienes valga decir, ostentan la calidad de verdadero empleador.

Conforme lo precedente, la convidada a juicio adosó como elementos suasorios para demostrar la tesis de su defensa, las especificaciones y requerimientos de los procesos licitatorios convocados por la CNSC nros. CNSC-LP 003 DE 2018 (págs.28 a 40, doc.04, carp.01), la guía técnica de acreditación de universidades públicas y privadas, instituciones universitarias e instituciones de educación superior expedida por la CSNC (págs.41 a 55, doc.04, carp.01); acuerdos de niveles de servicio del sistema de comunicaciones, de la capacidad computacional y de carácter procedimental de la UdeM como proponente en los procesos CNSC-PAMC-002 de 2015, CNSC-LP-002 de 2014, CNSC-LP-004 de 2015, CNSC-LP-006 de 2017, CNSC-LP-007- de 2014, CNSC-PAMC-002 de 2015; (págs.64 a 65, 73 a 77, 81 a 104, doc.,04); cartas de intención suscritas por la señora GLORIA CECILA RÚA JARAMILLO (págs.106 a 114, doc.14, carp.01); contratos de prestación de servicios celebrados entre la CNSC y la UdeM, junto con sus modificaciones (págs.115 a 144, 172 a 174, 180 a 181, 187 a 255, doc.04, carp.01); resolución nro. 1995 del 23-sep-14, por la cual se adjudica el proceso de licitación pública CNS-LP-007 de 2014 (págs.256 a 261, doc.04, carp.01), y; los contratos por prestación de servicios que fueran suscritos con la impetradora, págs.294 a 332, doc.04, carp.01).

Pues bien, de la plataforma probatoria se pueden encontrar elementos suasorios que permiten analizar circunstancias de modo, tiempo y lugar a efectos de establecer si efectivamente en la relación contractual que estuvo vigente entre las partes se verifican los presupuestos de una relación autónoma e independiente o si, por el contrario, a la luz de la primacía de la realidad sobre las formas, la verdadera empleadora de la accionante es la UdeM.

En orden a lo anterior, lo primero que relieves esta Sala de Decisión es que la pasiva, en efecto participó y le fueron adjudicados, diferentes contratos por parte de la CNSC para así diseñar, aplicar y calificar pruebas de concomimiento y entrevistas para el acceso a los empleos públicos. De manera similar, la institución educativa, de acuerdo con la guía técnica expedida por la CNSC, forzosamente debía garantizar la confidencialidad de la información y la adopción de un procedimiento, proceso, protocolo o sistema de gestión de seguridad de la información para tal fin. La anterior obligación se reprodujo en el texto de los contratos que se derivaron de la adjudicación de la licitación, donde claramente se especificó que la institución tenía como prestaciones a cargo:

“...25. Disponer, de la infraestructura física, técnica, tecnológica y de comunicaciones, necesaria, segura, adecuada, idónea y oportuna, para el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones y actividades inherentes al objeto contractual. El contratista debe contar, en las sedes donde se realizarán las pruebas, con personal dotado con equipos de cómputo, con conexión a internet, con el fin de atender las solicitudes de los aspirantes. 26. Disponer y garantizar que las instalaciones físicas en donde se

desarrollarán las actividades de administración, operación, gestión documental y archivo, manejo de bases de datos y operación de los sistemas de información, cuenten con la seguridad necesaria que impidan el acceso de personal ajeno a las mismas y que puedan poner en riesgo la información, seguridad y custodia del proceso de selección que se adelantará, en el marco de los principios constitucionales del mérito. 27. Disponer de la infraestructura tecnológica (Hardware y Software) y de la conexión a Internet - con la capacidad y seguridades suficientes para la operación adecuada y oportuna de los diferentes Sistemas de Información provistos por la COMISIÓN, con los niveles de servicio conforme a lo exigido en el ANEXO 9, ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES, DE LA CAPACIDAD COMPUTACIONAL Y DE CARÁCTER PROCEDIMENTAL. El contratista, con el ANEXO No. 9 presentado con la propuesta, garantiza disponer de las condiciones y niveles de servicio exigidos para la debida ejecución del contrato. 28. Concertar y suscribir con la COMISIÓN dentro de los cinco (5) días hábiles a partir del día de inicio de ejecución del contrato, un Plan de Trabajo para la Verificación de la Capacidad de la Infraestructura Tecnológica (comunicaciones y computacional), y dar estricto cumplimiento al mismo, conforme a los Acuerdos de Niveles de Servicio contenidos en el ANEXO No. 9 citado, y a las exigencias de la COMISIÓN para la eficaz automatización de la información en las diferentes actividades del proceso de selección. 29. Garantizar que el acceso o modificación de información del proceso de selección, se produzca única y exclusivamente a través de los sistemas de información dispuestos para el efecto, de acuerdo con sus funcionalidades, impidiendo cualquier otro tipo de acceso, modificación o retiro de información”.

Es así que la UdeM para cumplir los requisitos de preestablecidos para la CNSC en los procesos de licitación, suscribía acuerdos de niveles de servicio del sistema de comunicaciones, de la capacidad computacional y de carácter procedimental, donde declaraba cumplir con los protocolos de seguridad.

De lo transcrito emerge sin lugar a equívocos que el *a quo* apreció en su correcta dimensión los medios de prueba incorporados y practicados en el diligenciamiento judicial, en tanto los mismos son diáfananamente indicativos de que dadas las particularidades que rodean las convocatorias para la provisión de empleos públicos, se tornaba absolutamente necesario prestar los servicios requeridos dentro de las instalaciones de la universidad y aun con los equipos de su propiedad, de acuerdo a las condiciones y obligaciones estipuladas en la relación contractual con la CNSC; y cuyo fin último no era otro que cumplir lo señalado en el artículo 125 de la CP, garantizando la confidencialidad de los datos sensibles y la objetividad del mecanismo diseñado para el acceso a los cargos públicos.

Ello, porque el sistema de provisión del empleo público se rige por un conjunto de principios, normas y procedimientos a los cuales deben someterse todos los actores, como lo es, *v. gr.* la Ley 909 de 2004. Esas circunstancias, en ocasiones, pueden dar a entender que el contratista prestador de servicios personales está subordinado a la empresa contratante, como equivocadamente se plantea en la demanda; empero, en la realidad, la pretensora materialmente no estaba autorizada para prestar el servicio con un equipo de cómputo propio y fuera de las instalaciones de la institución universitaria, pues tales condiciones no responden

a los protocolos de seguridad y confidencialidad exigidos por la CNSC y que se espera de las funciones que se le encomendaron dentro de la implementación, desarrollo y evaluación de los concursos méritos.

No sobra recordar que, la Corte de forma inveterada ha sostenido en casos en donde se discute la autonomía de los contratistas independientes, que:

“...También se permite en los contratos comerciales, acordar que el contratista acuda a las instalaciones de la contratante a ejecutar las actividades, previa programación de éstas. Lo anterior, adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que los servicios programados obedecen al cumplimiento del contrato comercial, lo cual no desvirtúa en forma alguna la autonomía o independencia en la ejecución de los servicios por parte del demandante, sino que por el contrario, significa o representa coordinación y colaboración entre las partes contratantes para la ejecución de los servicios, por lo que no se puede descontextualizar en el caso sub examine el mencionado medio probatorio”. CSJ SL 01-jul-09 rad.35574.

Lo mismo sucede con la ejecución de las actividades con los elementos del contratante y en sus propias instalaciones, comoquiera que estos pueden ser necesarios para cumplir con el objeto del negocio jurídico. Así, la sentencia CSJ SL3027-2022, advirtió específicamente lo siguiente:

[...]

Por otra parte, es preciso señalar que en los contratos de prestación de servicios, por lo general el contratista desempeña sus actividades con sus propias herramientas, equipos o medios; sin embargo, bajo ciertas y particulares circunstancias es posible que esa actividad autónoma e independiente se desarrolle en las instalaciones del contratante, con elementos de su propiedad necesarios para la ejecución de la labor encomendada. CSJ SL216 de 2023

Conforme a lo anterior, es posible concluir que los contratantes, como la UdeM en el sub iudice, tienen la posibilidad de establecer unos compromisos relacionados con la prestación del servicio con los equipos y las condiciones de seguridad informática aprobadas por la CNSC, sin que dichos actos impliquen el ejercicio de un poder subordinante; a más de que, la impulsora en varias ocasiones prestó sus servicios dentro del marco de dos o más contratos de prestación de servicios simultáneos, percibiendo la subvención pactada para cada uno de estos.

Sin embargo, al margen de lo dicho, si la Sala, sin distanciarse de esas premisas incontrastables, analizara la presunción de la continuada subordinación de cara a las órdenes que le eran impartidas por el Director del CIAC, la conclusión sería la misma, en la medida en que los testigos en sus atestaciones fueron coincidentes al indicar que los requerimientos de los que era objeto la actora tenían como finalidad el cumplimiento de las obligaciones

contractuales en torno de la atención de reclamos, peticiones, informes y demás actividades; instrucciones o exigencias que, a juicio de la Sala, no desbordaron la independencia que caracterizó el servicio prestado por la señora RÚA JARAMILLO, pues “...*naturalmente al beneficiario de éstos le asiste el derecho de exigir el cumplimiento cabal de la obligación a cargo del prestador*”. CSJ SL, 24 ene. 2012, rad. 40121

Se sigue de lo anterior, que la universidad convocada logró derruir la presunción *iuris tantum* prevista en el artículo 24 del estatuto sustancial del trabajo, y por contera se descarta *ab initio* la continuada subordinación jurídica, como presupuesto inexcusable para considerar la existencia de una relación laboral tradicional entre las partes en contienda, lo que a todas luces marca el fracaso de la pretensión declarativa, corriendo igual suerte las acreencias laborales e indemnizaciones solicitadas, al pender de manera directa y sustancial de la existencia de la relación laboral invocada.

Como corolario de lo expuesto y atendiendo a las consideraciones fácticas y jurídicas antes descritas, se dispondrá por la Sala la confirmación de la sentencia de primer grado, en cuanto absolvió a la UdeM de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra por parte de la señora GLORIA CECILIA RÚA JARAMILLO.

3. COSTAS

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 365 y 366 del CGP, y en vista de que el fallo fue estudiado en bajo el grado jurisdiccional de consulta en favor de la promotora del juicio GLORIA CECILIA RÚA JARAMILLO, no se impondrán costas procesales. Las de primera se confirman.

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, Sala Quinta de Decisión Laboral**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

4. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, el 17 de junio de 2021, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL promovido por GLORIA CECILIA RÚA JARAMILLO, en contra de la UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.


SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

Lo resuelto se notifica mediante EDICTO, acogiendo el criterio de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, vertido en la reciente providencia AL2550-2021 del 23 de junio de 2021, M.P. Omar Ángel Mejía Amador.

Déjese copia digital de lo decidido en la Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen.

Se declara así surtido el presente acto y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado Ponente



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES
Magistrado



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada

CONSTANCIA SECRETARIAL

Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín.



RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario